

Romper las cadenas de la deuda

Athos FAVA,
Secretario General del Partido Comunista
de la Argentina (PCA)

La política expoliadora del imperialismo de EE.UU. con respecto a los países en desarrollo, y en particular a América Latina, es un hecho bien conocido y condenado por la inmensa mayoría de las naciones de la comunidad internacional. Las repúblicas latinoamericanas constituyen de antaño un área acostumbrada de bandolerismo y subversión económica del «gran vecino del Norte». Los latinoamericanos, lo mismo que otros pueblos del llamado Tercer Mundo, no sólo tienen que pagar a precios inflados los artículos manufacturados e insumos que compran a los monopolios, sino que debido a la vigencia de relaciones financieras desiguales y, sobre todo, el mecanismo avasallador del endeudamiento, cargan de hecho con el peso fundamental de la crisis económica que afecta a las potencias occidentales. La deuda externa de América Latina ha alcanzado la cifra astronómica de más de 360.000 millones de dólares y sigue creciendo vertiginosamente. Mi país, que recién ingresó en una nueva etapa, en la que la lucha de clases se desarrolla en las condiciones de la recuperación de las instituciones democráticas, es justamente uno de los principales deudores agobiados por estas cadenas.

La lucha en las nuevas condiciones

En la Argentina, en 1983, la dictadura militar fue sustituida por el gobierno constitucional del Dr. Alfonsín. Apenas electa, caracterizamos la nueva Administración como

un gobierno reformista, burgués, heterogéneo, en el que conviven desde elementos democráticos y patrióticos, inclusive antiimperialistas, hasta sectores de derecha, conciliadores con la oligarquía y el imperialismo.

Sobre el mismo se ejercen dos presiones, una reaccionaria y proimperialista y otra democrática, progresista y popular. De cuál de las dos predomine, dependerá el curso de los acontecimientos.

El proyecto político de nuestro partido, que vamos precisando, se ubica en el marco de la defensa de la democracia, para obtener su consolidación y cerrar el ciclo golpista en la Argentina. El eje de este proyecto es la lucha por la constitución de un Frente de Liberación Nacional y Social con las fuerzas antioligárquicas y antiimperialistas, que pueda convertirse en una alternativa real de poder popular.

La lucha de los comunistas por llevar a la práctica esta propuesta política tiene lugar en las condiciones de grave crisis que dejó la dictadura. Este contexto se agrava todavía más como consecuencia de las oscilaciones y vacilaciones del gobierno sometido a las dos presiones mencionadas. Es descarada y muy fuerte la que ejercen la oligarquía, los monopolios extranjeros y el gran capital nativo vinculado al imperialismo, sobre todo yanqui, así como los propios Estados Unidos a través del Pentágono, el Departamento de Estado y su embajada en Buenos Aires. Todos ellos tratan de anular aquellos aspectos más positivos de la política oficial, tanto en la afirmación del funcionamiento de las instituciones democráticas y la vigencia de las libertades públicas como en política exterior.

Irritan a la reacción interna y externa la libertad de expresión existente en el país y el juicio que se lleva a cabo contra las Juntas Militares responsables de los atroces crímenes de la dictadura, juicio que se va convirtiendo en un verdadero alegato contra los golpes de Estado y el terrorismo interno. La reacción trata también de torcer el rumbo de la política exterior eliminando en ella elementos positivos tales como la actitud en defensa del principio de no intervención en Centroamérica y el apoyo al grupo de Contadora, y el repudio al embargo criminal e inhumano decretado por Reagan contra Nicaragua. Porfía en sus intentos

de cortar el curso de la política internacional del gobierno en favor del cese de la carrera armamentista y la actuación junto a los demás jefes de Estado que firmaron la Declaración de Nueva Delhi, condenando la «guerra de las galaxias». Le molesta el grado de desarrollo importante de las relaciones comerciales y culturales con el campo socialista, en particular con la URSS.

Donde la situación se hace más difícil y las vacilaciones y concesiones del gobierno muestran su carácter de clase, es en la política económica y social, fuertemente condicionada por una de las cuñas más dolorosas que dejó clavada la dictadura militar: la deuda externa.

El saqueo legalizado

El problema de la deuda externa es un punto clave dentro del dilema de nuestra patria entre la liberación o la dependencia. Este no es un tema nuevo en el análisis de los comunistas. Como ayer lo hizo Malvinas, ha vuelto a poner al rojo vivo la contradicción entre los intereses del imperialismo yanqui y los de la nación argentina, contradicción que se expresa y se expresará con agudeza, al margen de los cambios que puedan producirse tanto en el gobierno de la Argentina como en el de los EE.UU.

La deuda externa —ese nuevo medio de modernizar y acentuar la dependencia— es un tema de importancia capital en torno al cual se despliega hoy en el continente una intensa batalla social y política, de cuyo resultado dependerá en gran parte la propia estabilidad constitucional y el futuro de la democracia.

El endeudamiento es una nueva forma de dependencia neocolonial, que agrava y profundiza todos los problemas que sufrimos. Ante el país se abren dos caminos: el de aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y reforzar la condición de país dependiente, o el de plantarnos dignamente ante los usureros logrando una moratoria por diez años de la deuda y sus intereses. Este es el único camino válido para el pueblo, un camino que puede llevarnos a la liberación.

No hacen falta muchos datos para ilustrar el difícil mo-

mento que vivimos en Argentina. Los sueldos no alcanzan ni siquiera a cubrir las necesidades mínimas (el Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que sólo cubre el 30 % de la canasta familiar). La inflación devora día a día los ingresos populares con una proyección anual que supera el 1.000 %¹. La demanda laboral ha caído en un 40 %. Hay 500.000 obreros industriales menos, y más de un millón de personas sufren la angustia de la desocupación total o parcial.

8 millones de argentinos viven en el mapa de la pobreza y, sólo en la provincia de Buenos Aires, la más poderosa del país, 1.800.000 niños padecen desnutrición. En 1970, según datos oficiales, la pobreza no pasaba del 10 % de la población, actualmente se estima en un 30 %. ¿Qué, si no la dependencia, explica que hayamos descendido del 10° puesto en el mundo en el año 1928 en ingreso por habitante al 50° en la actualidad, y que se amplíe cada vez más la brecha tecnológica con los países desarrollados, incluso en el campo, pese a algunas mejoras técnicas introducidas?

La deuda externa es el mecanismo por el que el imperialismo en alianza con la oligarquía nativa de viejo y nuevo cuño, busca reforzar y remachar la dependencia, haciéndonos pagar su crisis y el costo de la demencial carrera armamentista. Sobre cada uno de los 30 millones de habitantes cae el peso de una deuda de 1.600 dólares.

Sólo en concepto de intereses, en los últimos cinco años pagamos cerca de 22.000 millones de dólares, casi el triple de todo lo que debíamos en 1976. Esto equivale al costo actual de dos Paraná Medio², la obra del siglo que podría transformar el país.

Pero aquí no termina el saqueo del imperialismo y sus socios nativos. A los 5.500 millones de dólares que exigen anualmente en concepto de intereses se agregan toda una serie de pagos, producto de maniobras fraudulentas, que implican la pérdida de otros 14.700 millones de dólares por año³. Este es el brutal saqueo que hizo que la Argentina pasara de ser un país acreedor en 1947 a constituirse en uno de los grandes deudores del mundo.

El histórico despojo de las riquezas se agudiza con altas tasas de interés, la sobrevaluación del dólar, con la de-

sigualdad entre los bajos precios de las materias primas que exportan los países en desarrollo como Argentina y el alto precio de los productos manufacturados que importan. Veamos un ejemplo gráfico que muestra la caída de los precios internacionales de nuestras exportaciones: si en 1976-77 hacía falta 156 toneladas de trigo para comprar un tractor, en el año agrícola 1984-85 se necesitaron ya 270 toneladas. Y en el caso de los insumos importados el deterioro es mayor.

Los mecanismos del endeudamiento

Los países en vías de desarrollo han definido como cuestión esencial para su progreso la concreción de un Nuevo Orden Económico Internacional, que termine con esta injusta relación e inicie una nueva era en las relaciones económicas mundiales.

El combate contra la deuda externa es parte inseparable de esta decisión, aprobada por las Naciones Unidas en 1974 y cuyo objetivo principal consiste en resguardar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, eliminar la desigualdad económica entre los Estados y crear un régimen ventajoso de intercambio para los países en desarrollo, mejorando su situación financiera.

Dijimos que quieren hacernos pagar la carrera armamentista. Esta política tiene incidencia directa en el crecimiento de la deuda externa. El gobierno de EE.UU. ha elevado las tasas de interés y sobrevaluado el dólar, precisamente para obtener fondos del exterior que le permitan cubrir su déficit causado por los enormes gastos militares. Gastos que, si en 1984 llegaron a la cifra de 391.000 millones de dólares, para fines de 1989 están estimados en 597.000 millones. ¡Nada menos que unos 1.500 millones de dólares diarios que tenemos que desembolsar los pueblos del mundo no socialista, incluida la clase obrera norteamericana, para sostener la demencial política de guerra de Washington!

La deuda externa otorga un inmenso poder al capital financiero yanqui para intervenir, directamente o mediante el FMI, en la orientación de la política económica de nues-

tro país por un largo período, especialmente en sectores donde puede obtener grandes beneficios, como sucede con el petróleo, servicios, finanzas y otros. El corto plazo en que están contraídos la mayoría de los préstamos obliga a constantes renegociaciones ante la imposibilidad de pago, lo cual favorece este mecanismo.

Ningún país atado a los acuerdos con el FMI puede cambiar la paridad de su unidad monetaria sin el consentimiento del mismo, o sea, sin el beneplácito de los EE.UU. Argentina, que adhirió al FMI después del golpe de Estado de 1955, tampoco es libre de decidir soberanamente sobre su propia moneda. Así, el FMI desde sus inicios, y hoy más que nunca, es un instrumento de la expansión del capital, sobre todo norteamericano.

Como condiciones para la firma de un acuerdo con cualquier país del mundo, el FMI reclama rebajas salariales, aumento de la desocupación, incremento de las exportaciones a costa del consumo interno, desvalorización de la moneda nacional, liquidación de la protección arancelaria, reducción del área estatal de la economía y desnacionalización, recorte del gasto público, es decir, de la inversión en obras nacionales, educación, salud, y otras medidas.

El mecanismo que emplea con los préstamos es un refinado sistema de «torniquete» que podría describirse así: 1) se crea la imposibilidad de pagar la deuda; 2) viene un «crédito puente», que no hace sino engrosar el endeudamiento, porque él mismo es una deuda; 3) luego vienen nuevas y más fuertes exigencias para prestar fondos destinados a pagar intereses. Se integra así una cadena sin fin de más y más deuda, de más y más inflación, de más y más austeridad para el pueblo. Un importante resorte de este sistema es la política de ajuste basada en los salarios, para que estos no alcancen nunca el 100 % de la inflación.

En lo que se refiere a la exportación de capitales, la etapa actual de desarrollo del imperialismo se caracteriza por el predominio del capital privado sobre el financiamiento estatal y el de las inversiones financieras sobre las de carácter productivo. Es el caso de nuestro endeudamiento, donde el mayor porcentaje se debe a la banca

privada y donde en su casi totalidad fue canalizado por y hacia la especulación pura y simple. Más del 90 % del aumento de la deuda entre 1977 y 1982 es de origen financiero, sin ninguna contrapartida de compra de bienes, maquinaria o instalaciones de empresas.

Un 70 % del endeudamiento corresponde al sector público y fue contraído mediante la hipoteca de empresas estatales. El restante 30 %, al privado, y de él se hizo cargo el Estado a través, por ejemplo, del seguro de cambio. Puede hablarse de este mecanismo de saqueo y préstamo como el primer factor de endeudamiento. Hoy la hipoteca que devora a nuestro país trepó a la cifra de 48.420 millones de dólares. La deuda representa nada menos que cerca del 70 % de todo lo que Argentina produce en un año. El dato es más dramático aún si tenemos en cuenta que la deuda en 1975 representaba el 10 % del PBI.

Buena parte de la deuda privada es el resultado de autopréstamos de empresas o personas que enviaban recursos propios al exterior, fundamentalmente a EE.UU. y Europa Occidental, para luego retomarlos como si fueran préstamos de los bancos donde se habían depositado. El asunto no termina aquí. Después de especular en el mercado interno, estos señores volvían a enviar ese mismo capital al exterior sin denunciar la salida como pago de deuda. De este modo y con el nombre de cuenta de «salida de capitales no individualizados» del Banco Central de la República Argentina, figura hasta 1982 la cantidad de 9.524 millones de dólares⁴.

Por otra parte, entre 1976 y 1983 fugaron del país alrededor de 30.000 millones de dólares, con los cuales se adquirieron propiedades en Canadá, España, EE.UU., Brasil, Uruguay, Paraguay o se depositaron en bancos norteamericanos y europeos. Argentina fue virtualmente desangrada⁵.

¿Por qué los «fondomonetaristas» en Argentina defienden con tanto énfasis la necesidad de pagar? Porque, en rigor, ellos mismos son acreedores, los que han puesto en «fuga» capitales y luego los han prestado a nuestro país con garantías. Son los que han efectuado autopréstamos que luego aparecen como parte de la deuda al exterior. Proponen vender las empresas estatales para amortizar la

deuda, entregar el petróleo, que es un recurso no renovable, agotando nuestra riqueza, y poner, en definitiva, bandera de remate al país para que el núcleo del privilegio argentino reciba en el exterior, junto a los monopolios imperialistas y la gran banca, el pago puntual de los intereses de la deuda.

Los lineamientos del actual ministro de Economía de Argentina para el período 1985–89 dieron una apariencia técnica a la amortización de la deuda. De ser aplicado, ese plan traería el hecho monstruoso de que, al cabo del quinquenio, los intereses pagados por la deuda alcanzarían 23.500 millones de dólares, a los que se sumarían otros 6.000 millones de dólares exportados en concepto de dividendos y royalties. Es decir, en total la nación perdería 29.500 millones de dólares. Con sólo 25.000 millones de dólares sería posible pagar los salarios de un año de todos los trabajadores del país, públicos y privados. A título de ejemplo, se podría aumentar el salario real en un 20 % anual en el próximo quinquenio, y aun así todavía quedarían 4.500 millones de dólares, suficientes para resolver el problema de la vivienda a 750.000 familias humildes. En cambio, de aplicarse el plan oficial, al cabo de los cinco años habría que refinanciar, o sea, tomar nuevos préstamos por la suma de 5.600 millones de dólares. Y Argentina llegaría a deber entonces más de 50.000 millones de dólares.

La moratoria, una solución realista

Economistas de relieve y sectores del propio oficialismo en Argentina han aportado argumentos para una actitud digna frente al FMI. El planteo de la moratoria se hace carne cada vez más en las fuerzas progresistas del país, ante quienes se abren dos únicas perspectivas: seguir por el camino andado, junto al FMI, reforzando la dependencia, o romper con el pasado.

Lo que se discute es si trabajaremos para nosotros o para los monopolios yanquis y oligarcas. La pelea, entonces, es para definir quién paga la crisis. Si nosotros —como hasta ahora— o ellos. Por eso, respecto a lo negociado con

el FMI, decimos que hay que impedir su aplicación. Que hay que pelear por el frente de los deudores. Que no hay que pagar un peso de deuda ilegítima. Y lo principal, que hay que *imponer ya una moratoria*. Los comunistas, en resumen, afirmamos que todas las variables en discusión sobre plazos de refinanciación, con «stand by»⁶ o «crédito» puente, son tan sólo formas distintas de someternos por igual a los dictados del FMI. Por eso proponemos *moratoria por 10 años congelando y sin pagar en ese período ni capital ni intereses. Invirtiendo ese dinero en desarrollo del país, en salarios, trabajo, viviendas, educación, salud.*

Seguir las recetas del FMI llevará al desmembramiento económico. Sería como aceptar la herencia de la dictadura sin beneficio de inventario, abonando el terreno para un nuevo «gobierno fuerte», un nuevo golpe de Estado que venga a poner «orden» en el caos deliberadamente creado. Porque el atraso tecnológico, en el que ya estamos viviendo y que se acentuará con las recetas del FMI, agravará la situación económico-social a límites extremos.

Si se pagan los intereses, habrá menos fondos para la inversión interna, se reducirá el ingreso real de los asalariados, continuará la espiral inflacionaria del dólar y las tasas de interés; la presión impositiva caerá en definitiva sobre el pueblo y la desocupación irá en aumento. El mercado interno se contraerá aún más para la actividad productiva y se favorecerá una mayor concentración monopolista con las quiebras y cierres de numerosas pequeñas y medianas empresas.

Los compromisos con el FMI, o sea su «política de ajuste», llevarán a la venta total o parcial de empresas estatales que son rentables; al aumento constante de las tarifas y servicios públicos; a la restricción del crédito interno; al reemplazo de la regulación o control estatal sobre las filiales de transnacionales y fuertes grupos locales, en nombre de la «libre empresa y la libertad de mercados».

Nosotros partimos de la conclusión generalizada de que la deuda es impagable y ofrecemos una solución realista. Lo irreal es, precisamente, seguir atados a esa macabra rueda que nos lleva a pagar intereses sobre intereses, mientras el país se sangra y la deuda sigue creciendo sideralmente.

La moratoria de los deudores del «Tercer Mundo» no provocaría el crac económico y financiero mundial, como se afirma apocalípticamente. Pese a sus monstruosas dimensiones, esta deuda no alcanza al 10 % del PBI anual de los países capitalistas desarrollados. Esa cifra no sería la muerte para los países desarrollados como sí lo es para los nuestros. Por lo demás, la moratoria ayudaría a sanear la economía y el comercio mundial, superando los efectos restrictivos del endeudamiento acumulado, que conduce generalmente a la baja del consumo y al alza de la inflación, el desempleo y la desinversión. La deuda no es vital ni para los países que prestan ni para los que venden, y menos para los que se endeudan y compran. Una solución como la que propiciamos interesaría, por tanto, a los propios países industrializados, donde se podría reactivar la economía, producir, vender, crear nuevos empleos, etc.

Todo lo expuesto pone en evidencia que se puede y se debe unir la lucha de todos los pueblos de América Latina y el «Tercer Mundo» con la de la clase obrera y el pueblo norteamericano y de otros países capitalistas industrializados, contra la política de Reagan y las corporaciones transnacionales monopolistas vinculadas a la demencial carrera armamentista nuclear.

El problema de la deuda es un problema político, tanto para los deudores como para los acreedores. Precisamente por eso, el camarada Fidel Castro planteó que los países industrializados acreedores pueden hacerse cargo ante sus propios bancos privados de la deuda de los países latinoamericanos y de todo el «Tercer Mundo», lo que podría lograrse reduciendo entre un 10 % y un 12 % los gastos militares, sin afectar en lo más mínimo la economía de esos países ni los bolsillos de los contribuyentes.

Pero esta propuesta no quieren aceptarla un puñado reducido de grandes bancos norteamericanos e ingleses, porque *su interés privado no coincide con el interés nacional ni siquiera de los propios países acreedores*. Los grandes bancos privados acreedores reconocen que la deuda afecta a la economía mundial, pero no están dispuestos a ceder ni un ápice. Cabría preguntarse entonces: si los países deudores, sus gobiernos, se hacen cargo de la deuda, con la transformación de la deuda privada en pública, ¿por qué no

debieran los gobiernos de los países acreedores hacerse cargo del pago de esta deuda a sus bancos?

Nuestra propuesta de moratoria va al encuentro del necesario enfoque político del problema que proclaman jefes de Estado, sectores políticos y sociales de América Latina y del mundo. Ofrece, además, una determinada perspectiva a los propios acreedores para deshacer el nudo de una deuda que sus mismos cálculos revelan incobrable.

Desde el punto de vista de la grave crisis económica y de nuestra incipiente democracia, conquistada con tantos sacrificios, la moratoria que proponemos atacaría directamente las causas de la inestabilidad. Tal decisión, a juicio del Partido Comunista de la Argentina, debería ir necesariamente acompañada de un programa alternativo de liberación, apoyándose en la movilización del pueblo, programa que comenzaría por resolver la angustia popular. Esto acercaría y promovería la tan declamada unidad nacional, sobre bases patrióticas, poniendo una sólida barrera al golpismo.

¿Qué se podría hacer con esos 5.500 millones de dólares que pagamos anualmente por intereses, si declaramos la moratoria? Entre otras cosas, permitirían alimentar a 2.300.000 familias carenciadas. Podríamos seguir con otros datos que dan una dimensión de este robo colosal a que se ve sometido nuestro pueblo. Así, por ejemplo, los intereses a pagar en 1985 representan hoy el equivalente de 50 millones de toneladas de maíz o 41 millones de toneladas de trigo. Es decir, tres cosechas nacionales de trigo o cinco de maíz.

Nuestras posibilidades y tareas

Es necesario enfrentar al FMI porque no hay, en conclusión, cómo pagar en las actuales circunstancias. Y ello es posible, por las condiciones nacionales e internacionales.

Nuestro país, a pesar de su estancamiento, produce anualmente un volumen importante que llega a 70.000 millones de dólares. Con la moratoria liberaríamos recursos y se podría elevar la tasa de inversión, llevándola del 20 al 25 %. El país obtendría entre 14.000 y 17.500 millones de dólares disponibles para la inversión interna reproductiva.

Argentina cuenta con un comercio diversificado. Estados Unidos sólo nos compra un 10 % del total, el Mercado Común europeo el 25 % y el resto, o sea entre el 60 y el 70 %, va a los países de América Latina y de la comunidad socialista. Pero un hecho poco conocido (porque se oculta) es que tampoco es Washington el principal proveedor de nuestra importación, pues sólo concurre con el 20 %, en tanto el 35 a 40 % proviene de América Latina.

La mayor parte de las importaciones en procedencia de EE.UU. y de Europa Occidental, es cierto, están constituidas por insumos industriales (química, siderúrgica, etc.), así como bienes de capital. En caso de represalias, en su gran mayoría esos productos podrían adquirirse en países latinoamericanos, en naciones integrantes del movimiento de los No Alineados, en países europeos que no se adhieran al bloqueo y en los países socialistas, con los cuales Argentina tiene un saldo comercial favorable.

Para la adopción de una actitud digna ante el imperalismo contamos con grandes reservas: autoabastecimiento energético y alimenticio; la posibilidad, con medidas mínimas, de duplicar la actual producción de granos. La industria de artículos de consumo satisface las necesidades nacionales, en tanto que el sector de bienes de capital cuenta con un importante nivel a pesar del retroceso de los últimos años.

El país dispone de una gran variedad de recursos mineros y las empresas estatales tienen todavía un peso estratégico en energía, desarrollo nuclear, comunicaciones, siderurgia, petroquímica, transporte, comercialización, sector financiero. Por otra parte, no obstante el retroceso de los últimos años, existe una capacidad profesional y técnica, para ser utilizada en beneficio del desarrollo industrial independiente. Las pequeñas y medianas empresas nacionales tienen la posibilidad de adoptar formas de coordinación para uso de tecnología, compras, etc. (formas ya ensayadas con éxito en otro momento), lo cual elevaría su peso actual en el país.

Una actitud de ese tipo crearía, además, mejores condiciones para la unidad latinoamericana. Sabemos que no planteamos cosas fáciles. Pero tampoco es fácil el momento. Vivimos una encrucijada histórica donde está en juego la

perspectiva de Argentina como nación independiente. ¿Qué hubiera pasado si los patriotas de Mayo de 1810 hubiesen antepuesto las dificultades a la impostergable lucha por la independencia? Si hubieran obrado así, todavía seríamos colonia. Teniendo en cuenta las enseñanzas de la historia es como se trata de dar hoy la batalla de la deuda externa, parte fundamental de la lucha por la segunda y definitiva independencia.

Existe un fuerte entrelazamiento entre la lucha por la paz, la defensa del orden constitucional, la democracia, la libertad y la lucha contra el FMI. El dogal de la deuda se aplicó sobre miles de vidas troncadas por la dictadura. No puede separarse en el movimiento popular de liberación la consolidación de la democracia y el problema de la deuda.

En la lucha contra los efectos del endeudamiento, nos proponemos movilizar a las masas contra la inflación, los impuestos antipopulares, la caída de sueldos y salarios, el cierre de las fuentes de trabajo, las crisis en las provincias y economías regionales, en la salud, la educación, etc. Esta lucha debe iniciarse desde abajo. El enemigo principal es hoy el FMI, y los trabajadores deben enfrentarlo con la unidad y la lucha. Así, y sólo así, es como podremos ir construyendo los embriones del Frente de Liberación Nacional y Social.

Nuestra propuesta de la moratoria debe estar respaldada en la movilización popular, la unidad de las fuerzas democráticas y un plan de medidas mínimas entre las que deberían figurar —a nuestro juicio— la nacionalización de los rubros fundamentales del comercio exterior, la nacionalización del sistema bancario, el establecimiento de un estricto control de cambios, dar nuevas bases al sistema impositivo —sobre todo a las tierras improductivas y a las grandes fortunas— y poner fin al saqueo del Estado por los monopolios; organizar una amplia y efectiva participación popular en el control de los precios y la gestión estatal, con participación de las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales.

Convocamos a un movimiento patriótico contra la deuda, con una amplitud tal que abarque a todos los argentinos. Este es hoy el centro de la actividad de los comunistas. Significa avanzar en el perfeccionamiento y aplicación de

nuestro proyecto político, cuyo eje es la construcción del Frente, en el marco de la defensa de la democracia.

El problema de la deuda afecta no sólo a la Argentina, sino a todo el continente. Es un problema económico, es político y —como dijo Fidel Castro— al paso que van las cosas, empieza a ser revolucionario⁷. La lucha por resolverlo es una de las más importantes tareas que encaran hoy los pueblos de Latinoamérica. Esta lucha contará sin duda con el apoyo de los más vastos sectores sociales, contribuirá a la unidad continental en que soñaran San Martín y Bolívar y será parte de la batalla general de los países en desarrollo por su definitiva independencia, por el establecimiento de relaciones económicas más justas a nivel mundial.

Revista Internacional, N° 10 de 1985

¹ Apoyándose en esta angustia popular, y con un tremendo despliegue propagandístico que generó no pocas expectativas, el gobierno anunció el 14 de junio de 1985 un plan llamado «antiinflacionario», cuya esencia es la aplicación, y aún el agravamiento, de las recetas del FMI.

² Se refiere a la construcción, con el concurso técnico de la URSS, de una gran obra hidroeléctrica en el curso medio del Paraná. —N. de la Red.

³ Estimaciones propias acerca de remesas de utilidades, deterioro de los términos de intercambio, sobre y subfacturación en el comercio exterior, renta venal de la tierra; etc.

⁴ Véase *Clarín*, 3 de julio de 1983.

⁵ Véase *Tiempo Argentino*, 4 de mayo de 1984.

⁶ Los créditos de reserva *stand-by* —una de las formas de operaciones del FMI— se conceden a los países que afrontan graves desajustes de la balanza de pagos. —N. de la Red.

⁷ Véase F. Castro. *La impagable deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo, cómo puede y debe ser cancelada y la urgente necesidad del Nuevo Orden Económico Internacional*. La Habana, 1985.